



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

3313/2024

Autos: “TRANSOL S.R.L. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .-

VISTO:

El remedio federal articulado por la demandada cuyo traslado ha sido contestado por la actora;

Y CONSIDERANDO:

En orden a la procedencia formal del remedio federal articulado, cuadra señalar que el mismo ha sido interpuesto en tiempo oportuno y de acuerdo a las pautas ordenadas por la Acordada 4/2007.

Que la recurrente funda su recurso, especialmente, en la interpretación legal realizada por el Tribunal para la resolución del presente caso respecto de la ley 19.549 modificada por la ley 27742 y el decreto 814/01.

Que, a su vez, se han cumplido conforme lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 48, los requisitos que por su carácter autónomo el recurso requiere, es decir, un escrito que contenga un relato claro y preciso de los hechos relevantes del caso, la indicación de la cuestión debatida, como así también una crítica concreta y razonada de los fundamentos en que se basa la decisión del Tribunal (Fallos: 321:1365; 314:1626; 311:2195; 310:2209; 310:1147; 303:1108; entre muchos otros).

Que, al fundamentar el recurso, argumenta la quejosa que la decisión objeto del recurso proviene del Superior Tribunal de la causa y que la misma reviste carácter de sentencia definitiva; invoca, que en autos existe Cuestión Federal, de conformidad a lo que prescribe el art. 14 de la ley 48, ya que la decisión deja cuestionada la interpretación y validez de normas de naturaleza federal (CN arts. 16, 17, 18, 28 y 116). Finalmente, alega arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional que habilitaría la vía extraordinaria.

Que, en cuanto a lo que manifiesta en torno a norma señalada, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que se plantean en el caso de autos, sumado a ello que se encuentra en juego la interpretación y alcance de normas a las que se ha atribuido carácter federal, así como derechos expresamente protegidos por la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 17), se estima procedente conceder el recurso extraordinario articulado, acotado solamente en cuanto dicha cuestión.

Ello así, toda vez que se ha señalado que: “Es admisible el recurso extraordinario si los agravios se fundan en la aplicación de normas de carácter federal” (CSJN, A. 279 XXXVI, “Agro Industria Inca S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de



revisión de la concursada al crédito de DGI”, Sent. del 13/5/03, Fallos: 326:1549), y “aun cuando el apelante afirme que ataca la sentencia por estimarla arbitraria, si lo realmente impugnado es la inteligencia dada a normas de carácter federal, resulta procedente el recurso extraordinario deducido en ese aspecto” (del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema en C. 614. XXXVII, “Compagnie Nationale Air France c/ D.N.M., disp. 514/99, expte. 2056305/97, Sent. del 15/7/03, Fallos: 326:2367).

Que, asimismo, se dijo que “es formalmente procedente el recurso extraordinario si se encuentra en discusión la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que el recurrente sustenta en ellas” (art. 14, inc. 3º de la ley 48) (CSJN, C. 987. XXXVII “Celulosa S.A: c/ DGI s/ impugnación acto administrativo”, Sent. del 28/07/2005, Fallos: 328:2682).

Que respecto de la arbitrariedad del decisorio impugnado por la accionada, dicha doctrina “tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso (art. 18, Constitución Nacional), exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias efectivamente comprobadas en la causa” (Fallos: 343:2280; 343:354; 342:1023; 341:870; 340:1283; 331:583; 330:1083; 329:4524; 329:432; 321:2981). Ello así, en las presentes actuaciones no se advierte un caso tal, dado que las razones expuestas en el fallo dictado por este Tribunal brindan sustento suficiente que descartan el empleo de dicha doctrina.

Que los argumentos que esgrime al respecto la quejosa no logran abrir la instancia extraordinaria, pues sólo evidencian discrepancias con el criterio empleado por el Tribunal en la apreciación de los diversos elementos de juicio incorporados al proceso y con la solución final adoptada, lo cual no basta para configurar la tacha de arbitrariedad alegada. Además, tiene dicho el Máximo Tribunal, que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida y exige, entre otros requisitos, para la habilitación de esta última instancia excepcional, que debe probarse una violación concreta a las garantías constitucionales y no la mera disconformidad del recurrente con el mérito que efectuó el Tribunal Juzgador (Fallos: 331:477; 329:3949; 324:4300; 323:262, 488; 322:792, entre muchos otros). Extremo éste que ha sido incumplido desde que la recurrente no ha sido concreta en los agravios restantes.

Que, en otro orden, la impugnante manifiesta que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas y decididas en autos excede el mero interés particular y atañe al de la comunidad, configurando un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria (Fallos: 247:601; 255:41; 290:266; 292:229; 293:504; 307:770; 307:919; 317:1076; 324:533; 341:939; 342:287; entre muchos otros).

Que, atento a ello, cabe señalar que, en principio, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional que permite habilitar esta vía excepcional, dado que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado en la sentencia del Tribunal, no autoriza la vía intentada. Tampoco logra demostrar la quejosa que la cuestión invocada tiene virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden institucional o el fondo de las instituciones nacionales o grave afectación del principio de división de poderes o las instituciones fundamentales que el recurso extraordinario tiende a tutelar o las instituciones básicas de la Nación o el fondo de algún instituto jurídico en conflicto [SAGÜÉS, Néstor P. (2018), Compendio de Derecho Procesal Constitucional, 3º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, Argentina, p. 267 y sgtes.].

Corresponde, entonces, desestimar por insustancial la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Conceder el recurso extraordinario interpuesto por la demandada conforme lo dispuesto precedentemente; 2) Regístrese; 3) Notifíquese; 4) Protocolícese; y 5) Oportunamente, elévese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

NORA CARMEN DORADO  
JUEZ DE CÁMARA

WALTER FABIÁN CARNOTA  
JUEZ DE CÁMARA  
(SUBROGANTE)

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE  
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí;

JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO  
PROSECRETARIO DE CÁMARA

JSM

